

Elecciones, gobierno y paz en Colombia

*William Restrepo Riaza,
Director del Instituto de Estudios Políticos,
Universidad de Antioquia*

El debate político que acaba de terminar, por lo menos en lo que se refiere al asunto electoral, enmarca de manera simbólica y real, la compleja trama conflictiva de nuestro país como un todo social, material y político.

El triunfo del candidato presidencial Andrés Pastrana desde las huestes de la denominada Alianza para el Cambio, constituye una especie de punto de encuentro y, al mismo tiempo, de partida para el ejercicio presidencial de una alternativa diferente, en términos partidistas, de la actual hegemonía del partido liberal. El hecho de que Pastrana haya accedido al poder a través de una importante coalición basada en el partido conservador y una franja de participación, que a falta de mejor calificación se denomina independiente, constituye un hito trascendental en nuestra historia política contemporánea.

En el presente texto se abordan algunos aspectos centrales de la actual coyuntura política colombiana. Específicamente, se analizan los resultados de la segunda vuelta electoral y las implicaciones de estos resultados y de las nuevas relaciones entre Ejecutivo y Congreso, sobre el proceso de paz que intentará desarrollar el gobierno de la Alianza para el Cambio.

1

En el triunfo de Andrés Pastrana incide, como factor importante, el constante y profundo conflicto experimentado por el gobierno de Ernesto Samper, que terminó sumido en la más grave crisis de legitimidad que jamás haya tenido gobierno alguno en los últimos tiempos. A esto hay que sumar la crisis estructural que ha venido padeciendo el partido liberal como partido histórico de mayorías en el país y la posibilidad que tuvo el partido conservador para constituirse en punto de convergencia y eje regulador de la voluntad e intereses de los propios conservadores, de un sector importante de liberales que asumió una postura crítica contra su partido, y de sectores independientes, jóvenes y mujeres sobre todo, que movieron la balanza hacia la coalición conservadora de la Alianza para el Cambio.

La complejidad política de la actual coyuntura se acentúa si se reconoce que el partido liberal perdió el poder en el nivel ejecutivo pero se mantiene como partido mayoritario en el Congreso, aumentando, incluso, su potencial electoral en la elección presidencial. En este sentido, el agotamiento y la profunda crisis del partido liberal ha estado aparejada con el fortalecimiento del partido conservador, que poco a poco ha construido un espacio electoral relativamente fuerte, sobretodo en el departamento de Antioquia. Lo peculiar de este fenómeno es que en la elección presidencial este partido, con el apoyo de la franja independiente, fue un factor fundamental para minar el poder electoral del liberalismo en el ámbito nacional, aun con el reconocimiento de un aumento relativo de la votación en favor de éste.

En general se sostiene que la derrota del partido liberal estuvo ligada a la votación aportada a la Alianza por el Cambio, por los electores de Noemí Sanín y se da énfasis a ese factor en los votos del departamento de Antioquia. Además se asume que este es un ejemplo, el más importante hasta ahora, de un voto de opinión en el país.

Parece importante destacar el papel desempeñado por el que se puede llamar voto independiente en esta coyuntura electoral. Pero es problemático concluir de ahí, que este es un voto básicamente de opinión y que, además, se construye y aglutina alrededor de Noemí Sanín. El voto de opinión exige condiciones políticas que realmente no se dieron. Es, en principio, un voto que expresa una opinión construida alrededor de principios y programas y en la cual juega una decisión producida en el proceso político mismo. En nuestro caso, el punto de cohesión de los electores "independientes" fue el cansancio con un gobierno en crisis de legitimidad y con el símbolo, introyectado por

todos, de la corrupción del partido liberal y de su gobierno. Esto es lo que en esencia aglutina. Es un voto contestatario, sin identidad entre los electores, integrado espontánea y transitoriamente alrededor de Noemí Sanín en la primera vuelta y que vota, en la segunda vuelta, contra Samper, Serpa y el liberalismo.

Es un voto etéreo y volátil que en la coyuntura específica se aglutina con el partido conservador, pero que desaparece después de cumplida "la misión". Es una fuerza política extraordinaria cuyo valor es potencial hacia el futuro. Una energía que sería necesario canalizar, construir y formar, precisamente, como voto moderno o de opinión. Hasta ahora no tiene asiento real. Es un testimonio que no debe desperdiciarse en las coyunturas, que no deja una huella importante para el país en términos políticos y del Estado.

Se debe destacar también, desde el punto de vista teórico hipotético, que después de esta elección no será posible pensar en un control del poder político a partir de la opción exclusiva de los partidos tradicionales, excepto en el caso de que ambos inicien una profunda reestructuración modernizante que, para materializarse, debe proyectarse en el espacio de la mediana duración histórica. Sin embargo, las ideales e hipervaloradas opciones alternativas todavía necesitan para expresarse autónomamente más tiempo del que todos quisiéramos. Las condiciones históricas de nuestra cultura política, enraizada y determinada por los partidos tradicionales, hacen que la expresión de opciones alternativas deba ser construida y expresada a la sombra y en relación con los partidos tradicionales.

En Colombia, las profundas limitaciones y el atraso histórico de los partidos, y su poder relativo sobre el sistema electoral, expresan una peculiaridad contradictoria bien interesante. Solos, no podrán mantener el control sobre el poder, pero sin ellos, las otras opciones no consolidadas, tampoco podrán acceder a aquél. Extraña fusión de una dinámica política que demarca un periodo amorfo de transición de nuestro sistema político en el cual "pervive" el agotado modelo tradicional, mientras las bases, condiciones y factores de un poder político pluralista y moderno (terceras alternativas) no se construyen, todavía, con plena autonomía y poder.

Es aquí, precisamente, donde se encuentran las limitaciones para la construcción de un voto de opinión que sea la expresión de un sistema político transformado en el sentido moderno. Los atisbos, avances y retrocesos que observamos en las últimas elecciones dan cuenta de un importante, inacabado e insuficiente proceso de transición que sólo se puede medir en dirección de

las transformaciones históricas que produzca sobre el sistema político y las expresiones pluralistas de un hacer político definido como moderno.

2

Dentro del análisis, hay que considerar el papel y la dinámica del Congreso de la República en el cuatrienio que comienza. En la actual coyuntura política se reconoce que el nuevo Congreso está compuesto por un importante número de personas que, por primera vez, acceden a la representación política, la mayoría de ellas ubicados en la franja reconocida como independiente. También se da por sentado que la nueva conformación de Cámara y Senado impulsará un proceso de desarrollo político en su interior, haciendo de ellos un espacio para la construcción de una relación identitaria y de apoyo a la función presidencial. Se considera que con la participación de nuevos movimientos y la concreción de la coalición que decidió la presidencia y las mesas directivas en el Congreso, el partido conservador y los independientes consolidarán un poder de representación que será el apoyo definitivo a la función presidencial.

Esta es una verdad relativa. Es posible afirmar que en el periodo que comienza, el manejo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no será tan sencilla. Sobre todo, cuando se tiene por primera vez, en la historia reciente del país, a un partido liberal golpeado, que puede desplegar todo su potencial y fuerza política en la oposición; lo cual es no sólo más cómodo sino más rentable políticamente, como lo prueba el partido conservador y sus líderes, usufructuarios de la crisis del gobierno y del liberalismo en el período anterior.

De lo que se trata aquí es de llamar la atención sobre un punto vital a la hora de sopesar las posibilidades políticas del gobierno conservador para liderar un proceso de cambio en el país. El juego de poder identitario entre Congreso y Gobierno es, siempre ha sido, una condición necesaria para cualquier posibilidad de gestión gubernamental. Así como el gobierno anterior cooptó las fuerzas del Congreso, de la misma manera será de difícil para el actual mantener la cohesión de la coalición y, al mismo tiempo, hacer frente a los embates de la ya promulgada oposición patriótica, radicalizada desde la escaramuza eleccionaria de las mesas directivas del Congreso.

Al contrario de lo que muchos esperan, este será un período de agitación política y de confrontación sectaria -no doctrinaria- entre el partido de oposición y el Ejecutivo. El costo que tendrá que pagar y manejar el partido de gobierno estará relacionado, sin lugar a dudas, con el manejo burocrático del Estado y

con las implicaciones políticas de un debilitamiento pernicioso para enfrentar la radical confrontación dentro de la que se moverá el liberalismo.

Si esta condición de la mecánica política del poder en la relación entre Congreso y Ejecutivo se expresa a través de la problemática de la gobernabilidad, encontramos que el juego de relación entre gobierno y presión social estará marcado por un tipo de demanda cuyo tamaño trasciende cualquier antecedente, pues el gobierno de la Alianza para el Cambio estará atravesado y definido por la gran expectativa, convertida en necesidad perentoria, de atacar de manera frontal la crisis histórica del país.

El análisis de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, relación que define la problemática política del país en el futuro inmediato, no deja visualizar una fuerza cohesionadora, un poder de mando y de responsabilidad que permita esperar del gobierno que comienza un papel de conductor frente al reto de los grandes cambios que debe iniciar el país para superar su estado de crisis permanente.

El peso de las transformaciones que se pretenden realizar trasciende al sistema político y la forma como éste se concreta en la organización gubernamental. Al dinamizarse el proceso de cambio, el sistema político y su estructura de poder puede ser rebasada y, además, no es posible salir de la crisis si no se toca y reforma el sistema político. En este sentido, el cuadro del poder político que presentan Gobierno y Congreso, por lo menos hipotéticamente, permite suponer su relativa debilidad frente a la responsabilidad histórica que intenta asumir. Es este el riesgo que se corre. Y en el camino, lo que puede suceder es una simple "acomodación" de toda nuestra problemática, en su forma de tratamiento, al clásico maquillaje reformista de tipo formal, sin tocar el sistema mismo.

El país tiene suficiente tradición y experiencia en este tipo de frustración. Estamos "acostumbrados" a que todo o algo se reforme formalmente, mientras que la realidad y los fenómenos que la materializan se quedan como están, naturalmente agravados. Este es el peligro que se presenta en relación con las grandes expectativas de cambio con que se inicia el gobierno.

3

Las expectativas sobre el gobierno que empieza están expresadas bajo el símbolo de la esperanza y la ilusión de que el país se va a enrutarse hacia la construcción de un futuro promisorio. Pese a que la reorganización de la economía y el ideal de construcción de la paz constituyen los temas que

prioritariamente copan el espacio de la función y objeto del nuevo gobierno, podría decirse que este último encierra, prácticamente, toda la problemática del país en términos contemporáneos.

De nuevo se plantea un punto de arranque en la negociación con los grupos guerrilleros, y el símbolo de ruptura con respecto a todos los precedentes lo constituye la entrevista directa del nuevo presidente con el máximo líder del movimiento guerrillero Manuel Marulanda. Al mismo tiempo, el principio de acuerdo firmado en Alemania entre algunos representantes de la “sociedad civil” y los voceros autorizados del Ejército de Liberación Nacional, Eln, constituye un punto sobre el que se fundan nuevas esperanzas.

Lo destacable, lo que marca un hito importante es, precisamente, que el presidente no delegue estratégicamente la búsqueda de la paz, sino que la enfrente personalmente; además, que rompa radicalmente con todos los precedentes, fortaleciendo el proceso con la participación directa de la “sociedad civil” y, finalmente, que reconozca a los actores y, desde luego, a la guerrilla como eje fundamental de las conversaciones y del objeto de paz. Estos elementos marcarían las diferencias con respecto a la historia pasada y, sobre todo, en relación con las expectativas de avanzar positivamente en el proceso. Todo lo anterior sobre una decisión de principio lógica: para hablar y buscar la paz no puede dejarse de lado a ninguno de los actores: gobierno, fuerzas militares, guerrillas, paramilitares y, por supuesto, “la sociedad civil”.

Para medir en términos reales las posibilidades de la paz en el país, me parece necesario destacar lo que podría denominarse los “costos históricos y sociales” de un tal proceso. El punto de partida básico que califica una opción histórica de construcción de la paz entendida como proceso, está determinado por el explícito reconocimiento del peso y la fuerza histórica que tiene la violencia en su manifestación particular de guerra “consuetudinaria” entre guerrilla y Estado y los afluentes que se han ido forjando causal y consecencialmente alrededor de esos ejes principales. Reconocer la guerra precisamente no como algo externo y accidental o como algo que sobra y estorba, y que, por tanto, hay que ignorar y negar, o tratar de manera secundaria y tangencial.

Al contrario, como se ha dicho antes, se exige un reconocimiento real de este fenómeno, que es consustancial a nuestra historia moderna y contemporánea. Esta actitud, por simple que parezca, se convierte en esencial a la hora de asumir la responsabilidad histórica de construcción de la paz. Desde ese nuevo punto de partida, el peso histórico, material, social, cultural y

político del proceso que se inicia es de tal magnitud, que la forma como ha sido asumida la paz en los periodos anteriores, no es ni puede ser suficiente. El esquema en que el asunto ha sido tratado, precisamente por no asumirse en su peso y en su trascendencia desde el punto de vista histórico, antropológico y cultural, no ha permitido -y no podría haberlo hecho- que se concretara y que se logaran avances de la trascendencia que un asunto de tal magnitud exige o propicia.

4

Traducido a nuestra estructura socio-material y política, el proceso de paz en el sentido aquí planteado estaría definido, si se quiere, en la dimensión de un gran combate histórico de construcción de cultura y de civilización contemporáneas. Significaría, pues, que el proceso de paz se convertiría en la forma peculiar que adoptaría para nosotros el proyecto de construcción de la modernidad, con todo lo que ello implica. Acercarnos a la búsqueda de la modernidad por la vía del proceso de paz significa, ahí sí, la configuración de una fuerza motora cuya esencia estaría definida no por el clásico y simple reformismo político jurídico, sino por una profunda y radical transformación de las condiciones históricas y estructurales de la crisis.

La violencia y la guerra, el conflicto del país moderno, se ha reconocido, están enraizados en nuestra situación económica, social, cultural y aún mental, y en este sentido sus propias dinámicas, por ejemplo con respecto a nuestra estructura rural, están profundamente asentadas en la grave y profunda problemática que adopta el campo colombiano a través de las típicas formas de concentración de la propiedad y las nuevas y peculiares formas de colonato dinamizadas, precisamente, por los actores y fuerzas en conflicto. De ahí entonces que la preocupación por la estructura agraria del país, constituye un punto de partida, una condición *sine qua non* a las posibilidades no ya de pensar sino de construir las bases primarias para la solución del conflicto del campo colombiano. El costo de este reconocimiento está determinado por las propias fuerzas socio-materiales, grupos de poder y complejo de intereses que asisten hoy al campo colombiano.

Así, la cuestión agraria, toma la forma de elemento estratégico, como problemática central a la hora de apuntar históricamente hacia la construcción de la paz. Paralelamente, por tanto, nuestra estructura económica en sus formas de concreción a través de los modelos económicos y de desarrollo con los que el país ha venido trajinando, tendrán que ser pensados y sopesados a la luz de la nueva realidad.

5

Desde el punto de vista político se ha dicho que son más los logros que los vacíos que ha alcanzado la sociedad colombiana en términos modernos, sobre todo a partir de la Constitución de 1991. A este respecto habría que reconocer los indudables avances formales en dirección democrática, pero también las limitaciones presentes en el plano de lo concreto y en la materialización de una cultura moderna. Aspectos que se constituyen en obstáculos hacia la definición de una sociedad moderna y ciudadana en el sentido político.

La apertura pluralista, la construcción de cultura participatoria y el juego de la contienda por el poder en esquemas de libertad, responsabilidad y racionalidad, constituyen categorías políticas más históricas que formales. Debemos, por eso, pagar también un gran costo histórico para alcanzarlas. Así pues, la construcción de la paz deberá dar cuenta de la dinamización de las energías sociopolíticas que todavía no han sopesado su fuerza y, sobre todo, no han encontrado el espacio propicio para su libre despegue y para la búsqueda de su propio rumbo sin ataduras ni condiciones.

En otras palabras, podría afirmarse, tentativamente, que aún hoy, tal vez con más fuerza que en el pasado reciente, la problemática de la paz en el sentido aquí apenas esbozado, es la problemática sustancial de dos grandes cosas al mismo tiempo, o sea, la recomposición del Estado como expresión máxima de convergencia de los diferentes intereses de nuestro ser social, monopolizador ahora sí de la fuerza material y legal, con su esencia medular de expresión de lo público, y su cualificación histórica en el sentido constructivo de la gran problemática del Estado nacional moderno.

Este es el panorama histórico reciente que tiene de complejo, problemático y peculiar que se gestará a partir de las confrontaciones radicales en el campo de la política y de la guerra. La búsqueda de solución del conflicto, de nuestro conflicto histórico, tiene forma original de violencia y de guerra, y es necesariamente a través de su confrontación esencialmente política como podremos construir, de manera dolorosa y con todos sus costos, ese que ahora idealmente se convierte en nuestro objetivo histórico, vale decir la paz.

Es aquí, en la trascendencia y dificultad que encierra el trabajo para la paz, donde aparece definitiva la función gubernamental. De la forma como se estructure y funcione el Ejecutivo, de un lado y el Congreso, de otro, pero sobre todo de una relación entre ambos, que dé forma y funcionalidad a una real

governabilidad, dependerá, en fin de cuentas, la conducción y liderazgo positivo, para llevar al país hacia la solución del conflicto en el sentido histórico aquí anotado.

En este punto aparece finalmente la incertidumbre respecto a lo que muchos miran con optimismo explicable pero desmedido. La visión prometeica de que el nuevo gobierno en sí mismo, encierra todas las condiciones para llevar al país a rumbo seguro, no es positiva en relación con la responsabilidad que tendríamos ciudadanos y gobierno, de pensar y actuar seria, real y racionalmente sobre nuestro futuro, sus posibilidades y sus costos.